

setas cincuenta céntimos, ó sean treinta y siete pesos cincuenta centavos. Es decir que en junto pagan los referidos trescientos bocoyes de azúcar y setenta y cinco de miel por el impuesto de exportacion novecientos treinta y siete pesos cincuenta céntimos, que es exactamente el ciento cincuenta por ciento del impuesto directo, ó lo que es lo mismo el siete y medio por ciento del producto líquido, viniendo así á resultar que mientras las demas riquezas solo satisfacen al Estado el cinco por ciento de contribucion sobre sus productos, los hacendados cuyos frutos tienen gravada la exportacion, pagan cuando menos el doce y medio por ciento; y digo cuando menos por que ese impuesto sube, cuando los frutos valen menos del precio fijado, y por que siempre es mas gravoso indudablemente para los pequeños cosecheros de café y tabaco que no cuentan para el cultivo de sus fincas y la recoleccion y ventas de sus cosechas con los recursos, elementos y facilidades de que pueden disponer los hacendados de caña.

¿Puede ser justa ni sostenible una desigualdad tan exorbitante en los impuestos?

¿Puede ocultarse á nadie que de prolongarla se seguiria inevitablemente la decadencia y la ruina de nuestra agricultura, que es la principal riqueza del país cuyo desarrollo y fomento se debe á toda costa proteger?

Si en momentos dados, si en circunstancias verdaderamente extraordinarias ha podido prescindirse de todas esas consideraciones, ante la Ley forzosa de la necesidad, ante el peligro en que se consideraron los grandes intereses sociales y materiales de la Isla y el imperioso deber que tenia el Gobierno de salvarlos, por aquel principio *salus populi suprema lex est*, hoy que no existe la mas ligera sombra de ese peligro; hoy que no hay esa necesidad; hoy que nos encontramos en circunstancias normales y que el Tesoro tiene en sus ingresos ordinarios, elementos y recursos sobrados para cubrir todas sus atenciones, no hay razon alguna que justifique la continuacion de un impuesto extraordinario, que como tal se estableció, y nunca pudo tener otro carácter que el de provisional y transitorio interin subsistían las causas que lo motivaron.

Esas causas que dejaron exhanstas las arcas del Tesoro público y produjeron la angustiosa situacion y las dificultades de todo género de que se vió rodeado el Gobierno de esta Isla á principios de mil ochocientos sesenta y nueve para cubrir la mas indispensable atenciones y cargas del Estado, son de todos conocidas. En primer lugar los crecidos suplementos que las cajas de esta Isla hicieron á las de la Habana, con motivo de la guerra de Santo Domingo. En segundo lugar la tormenta y los terremotos que ocurrieron á fines de mil ochocientos sesenta y siete, no solo por los estragos que causaron materialmente á las poblaciones y los campos de la Isla destruyendo algunas riquezas y minorando las cosechas, sino por la alarma y espanto que infundieron, ahuyentando el trabajo, la confianza y el crédito; todo lo que contribuyó poderosamente á disminuir los productos imponibles y dificultar el pago de las contribuciones, y en tercer lugar, la franquicia de los derechos de importacion que con el mejor deseo y para aliviar en lo posible las desgracias sufridas por esta Antilla acordó el Gobierno de S. M., á los artículos de mayor consumo en esta; franquicia que por desgracia dió resultados totalmente contrarios; pues sin haber abarataado el precio de aquellos artículos por causas múltiples que no son de este lugar, trajo consigo una reduccion notable en los ingresos de las Aduanas haciendo así mas precaria y aflictiva la situacion del Tesoro.

En la actualidad sin embargo no subsiste ninguna de esas causas, lo repito: el estado de la hacienda pública no solo es desahogado, sino que despues de cubiertas todas las atenciones tiene crecidos sobrantes en sus arcas y además un crédito de gran ascendencia contra las Cajas de la Habana, que un día se hará efectivo, colocándola todavia en mejores condiciones: la próspera situacion de la Isla permite á todos sus habitantes pagar corrientemente sus contribuciones directas: las cargas que el presupuesto del Estado tenia en ella se han disminuido con motivo de la instalacion de esta Excm. Diputacion Provincial, á cuyo cargo corre ya todo lo concerniente al fomento de los intereses morales y materiales de la Provincia, para la cual tiene el deber de incluir en sus presupuestos las cantidades necesarias; siendo tanto así cuanto que en el presupuesto de Estado del año económico que está para es-

mirar, ya no figuran las sumas que en los anteriores venian consignándose para las obras públicas, y es probable que en el del nuevo año que va á comenzar no figure tampoco la partida de cincuenta mil pesetas que hasta aquí venia asignada con aplicacion á los gastos de una escuela normal, y para auxiliar á las elementales de la Isla.

No solo es pues urgente y de rigurosa justicia la supresion inmediata de los derechos de exportacion de que me vengo ocupando, sino que atendidas todas las consideraciones expuestas entiendo que tambien debia imponerse del Gobierno de S. M. se dignara ordenar, que por cuenta de los sobrantes que existen hoy en el Tesoro público de esta Provincia, se entregasen á esta cuando menos quinientas mil pesetas para cubrir con ellas siquiera sus mas apremiantes atenciones.

Si por virtud de la nueva organizacion dada al Gobierno y Administracion de esta Isla por consecuencia de las reformas que han comenzado á plantearse, el Estado se ha descargado de una gran parte de sus antiguas obligaciones echándolas sobre la Provincia, nada es mas justo que á la Provincia vendan los recursos que al Estado se concedieron para cubrir tales obligaciones, y mucho mas cuando por el organismo especial de estos países, que hasta ahora han tenido y siguen teniendo un presupuesto propio independiente y separado del de la Metrópoli, de la Provincia misma han salido exclusivamente esos recursos.

Cuantiosas sumas han entrado en las Arcas del Tesoro, prescindiendo de las crecidísimas á que ascienden las recaudadas por el derecho de importacion procedentes de los antiguos fondos de caminos, y despues que estos se centralizaron, de los impuestos especiales que aun vienen figurando en los presupuestos del Estado, para la misma atencion y el fomento de la Isla, así como por otros conceptos que deben aplicarse especialmente al ramo de instruccion pública, acerca de los cuales y para que desaparezcan como deben desaparecer del indicado presupuesto, viniendo á constituir parte de los recursos del Provincial, se ocupa el comisario que suscribe en estudiar antecedentes y reunir los datos necesarios, para proponer á esta Excm. Diputacion lo que estime mas conveniente á los intereses de la Provincia, pero en tanto que esto tiene lugar, no es justo que la Provincia continúe sin escuelas, sin caminos y sin otros mil establecimientos que necesita urgentemente por carecer de ellos ó no tenerlos mas que en una escala insignificante é insuficiente, y no contar tampoco con recursos propios para crearlos.

Hasta ahora esta Corporacion no tiene otros medios para levantar sus cargas que el de hacer un repartimiento sobre todos los pueblos de la Provincia, y so pena de hacer muy gravosa esa derrama aumentándola considerablemente, tiene que limitarse á los gastos mas precisos é indispensables para su sostenimiento, que viene á ser inútil si nada puede hacer por el fomento del país.

Nada mas justo, nada mas equitativo y racional pues, que el Estado dé ó restituya mejor dicho á la Provincia los recursos que de la misma Provincia ha sacado para llenar obligaciones que en mucha parte ha dejado incumplidas y que hoy ha descargado sobre la última.

No puede decirse que existen sobrantes en el Tesoro público de esta Isla, cuando tanto hay que hacer en ella, cuando en materia de instruccion pública solo el once por ciento de la poblacion sabe leer y escribir, cuando faltan escuelas que difundan siquiera esos primeros rudimentos del saber humano, y no tenemos un Instituto ni una Escuela normal; cuando en el ramo de Beneficencia no tenemos otro establecimiento Provincial en toda la Isla que el asilo de ese nombre, que existe en esta Ciudad, en donde tanto hay que reformar y aumentar; cuando nuestros caminos públicos se hallan en tan lamentable atraso, como que apenas contamos algunos kilómetros de carreteras que merezcan este nombre, repartidos en diferentes trozos; cuando no tenemos un Banco que preste ayuda á nuestra naciente agricultura, libertándola de las trabas con que la paralizan el agiotage y la usura; y cuando nos faltan en fin tantas otras cosas que está llamada á crear ó mejorar esta Corporacion, si ha de cumplir uno de sus mas importantes deberes, cual es el de atender al fomento de los intereses morales y materiales de la Isla.

Fundado pues en cuanto queda expuesto, el Comisario que suscribe apoyando con el mayor gusto la proposicion presentada por

los Diputados Don José Marcial Quiñones y Don José de Celis Aguilera, es de parecer que ejercitando V. E. las atribuciones que le concede el párrafo sexto del artículo cuarenta y seis del Decreto orgánico, debe proponer al Gobierno Supremo por conducto del Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil de esta Isla y en la forma oportuna, no solo la inmediata supresion de los derechos que gravan hoy la exportacion de los azúcares, nieles, café y tabaco de la Isla, sino tambien, que en atencion á los crecidos sobrantes que existen hoy en las arcas del Tesoro público de esta Isla, procedentes de ese mismo impuesto, á las grandes necesidades que tiene la Provincia que cubrir respecto al fomento de sus intereses morales y materiales, á la completa carencia de recursos propios en que se halla hoy para llenar dichas necesidades, y á las demas razones recomendadas, se sirva ordenar así mismo que de los indicados sobrantes se apliquen á la Provincia, entregándose á la Tesoreria de esta Diputacion Provincial, la cantidad de quinientas mil pesetas que incluirá y distribuirá en sus presupuestos, sin perjuicio de los demas recursos que en adelante se le acuerden con el carácter de permanentes, para que pueda llenar cumplidamente la alta mision que se le ha encomendado.—Puerto-Rico 15 de Junio de 1871.—Julian E. Blanco.

Y en cumplimiento de lo acordado libro la presente para su insercion en el PERIÓDICO OFICIAL.

Puerto-Rico á 11 de Julio de 1871.—Andrés Metrano.

Por acuerdo de la Excm. Diputacion, en sesion ordinaria celebrada el 8 del corriente, se han designado los Miercoles y Viérnes á las 7 1/2 de la noche, para las sesiones que deberán tener lugar en el presente periodo semestral.

Y en cumplimiento de lo mandado, se inserta en el PERIÓDICO OFICIAL, para la debida notoriedad.

Puerto-Rico Julio 11 de 1871.—El Secretario interino, Andrés Medrano.

Capitanía General de la Isla de Puerto-Rico.
ESTADO MAYOR.

ORDEN GENERAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 1871 EN PUERTO-RICO.

Seccion Archivo.—Número 196.

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 24 de Abril último se comunica al Excmo. Sr. Capitan General, la Real orden circular que sigue:

“Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitan General de Castilla la Nueva, lo siguiente:—El Consejo de guerra de Oficiales generales celebrado en esta Corte el dia 7 de Junio próximo pasado, para ver y fallar la causa instruida contra el Capitan D. Uvaldo Romero y Quiñones, acusado de haber proferido voces subversivas en la manifestacion de obreros que tuvo lugar el dia 21 de Febrero anterior, pronunció la sentencia siguiente:—“Le ha condenado y Condena el Consejo por unanimidad de votos á la pena de que le sirva de castigo la prision sufrida, poniéndole desde luego en libertad, apercibido de mayor rigor si reincidiese en la misma falta.”—Enterado el Rey [Q. D. G.] á quien he dado cuenta de la citada causa que adjunta remito á V. E. Visto lo que de ella resulta, y de conformidad con lo propuesto por el Consejo Supremo de la Guerra en acordada fecha 18 de Mayo próximo pasado de que se acompaña copia para los efectos correspondientes; ha tenido á bien mandar S. M. que se publique la preinserta sentencia en la forma prevenida atendido su carácter ejecutivo, resolviendo sin embargo que el fallo del referido Consejo de guerra de Oficiales generales se resiente de excesiva lenidad, declarando por último comprendido al interesado en el Decreto de amnistia de 9 de Agosto de 1870, cuyos beneficios le quedan aplicados.”—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.”

Y de orden de S. E. se publica en la general de este dia, á los fines de ordenanza.—El Coronel Jefe de E. M., Manuel Cortés.

ADICION A LA ORDEN GENERAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 1871 EN PUERTO-RICO.

Seccion Archivo.—Número 197.

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 26 de Abril último, se comunica al Excmo. Sr. Capitan General, la Real orden circular que sigue:

“Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitan General de Cataluña, lo siguiente:—El Consejo de guerra de Oficiales ge-

nerales celebrado en Barcelona el dia 3 de Agosto del año próximo pasado, para ver y fallar la causa instruida contra el Comandante en situacion de reemplazo D. Domingo Diaz Soler, Capitan Depositario que fué del 1.º Batallon del Regimiento Infanteria Sevilla núm. 33, por desfalco que le resultó en sus cuentas al entregar la Caja el diez y seis de Diciembre de 1869, pronunció la sentencia siguiente:—“Ha condenado y condena el Consejo al referido Comandante D. Domingo Diaz Soler al pago de los 922 escudos 682 milésimas, importe del desfalco, á descuento de los dos tercios de su sueldo, no obstante la responsabilidad subsidiaria á quien corresponda, suspendiéndole del arresto que hoy sufre, en vista de los extremos que abraza la Real orden de 4 de Junio de 1796, en razon á los buenos antecedentes que constan de su hoja de servicios y hechos y á la circunstancia atenuante de no haber podido probarse en el proceso que la desaparicion de la suma haya sido en provecho propio.”

—Enterado el Rey (Q. D. G.) á quien he dado cuenta de la citada causa que adjunta remito á V. E. Visto lo que de ella resulta, y de conformidad con lo propuesto por el Consejo Supremo de la Guerra en acordada fecha 31 de Marzo último, ha tenido á bien mandar que se publique la preinserta sentencia en la forma prevenida atendido su carácter ejecutivo, declarando sin embargo que el fallo adolece de lenidad, toda vez que los Jueces que la dictaron no han tenido presente lo mandado en la citada Real orden de 4 de Junio de 1796 ni considerado que el recurso adoptado de dispensar al reo del encierro en un castillo, se opone al texto literal de aquella Real disposicion, olvidando tambien que la ordenanza prohíbe tal interpretacion.”—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.”

Y de orden de S. E. se publique en la general de este dia, para los fines de ordenanza.—El Coronel Jefe de E. M., Manuel Cortés.

ORDEN GENERAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 1871 EN PUERTO-RICO.

Seccion Archivo.—Número 198.

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 9 de Mayo último se comunica al Excmo. Sr. Capitan General, la Real orden circular que sigue:

“Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitan General de Granada, lo siguiente:—El Consejo de guerra de Oficiales generales celebrado en esa plaza el dia 30 de Junio de 1870, para ver y fallar la causa instruida contra el Alférez del Regimiento Infanteria de Iberia, Don Eduardo Alterache y Amargos, acusado de desfalco de intereses del Cuerpo, pronunció la sentencia siguiente:—Le ha condenado y condena el Consejo por unanimidad á la pena extraordinaria de que reintegre la suma de trescientos veinte y tres escudos de su peculio particular ó con los dos tercios de su sueldo, debiendo permanecer arrestado en un castillo hasta que satisfaga la referida cantidad en conformidad al artículo 48, título 52, tratado 8.º de las ordenanzas del Ejército y de las Reales órdenes de 4 de Junio de 1796, y 21 de Diciembre de 1853, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los Jefes y Oficiales que eligieron al Fiscal procesado para la conduccion de los caudales distraidos.”—Enterado el Rey [Q. D. G.] á quien he dado cuenta de la citada causa que adjunta remito á V. E.—Visto lo que de ella resulta, considerando que el fallo recaído en la misma se encuentra ajustado á los méritos del proceso y de conformidad con lo propuesto por el Consejo Supremo de la Guerra en acordada fecha 31 de Marzo último; S. M. se ha servido disponer se publique la preinserta sentencia en la forma prevenida atendido su carácter ejecutivo.—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento.”

Y de orden de S. E. se publica en la general de este dia, á los fines de ordenanza.—El Coronel Jefe de E. M., Manuel Cortés.

ADICION A LA ORDEN GENERAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 1871 EN PUERTO-RICO.

Seccion Archivo.—Número 200.

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 26 de Mayo último se comunica al Excmo. Sr. Capitan General, la Real orden circular que sigue:

“Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitan General de Andalucía, lo siguiente:—El Consejo de guerra de Oficiales generales celebrado en Sevilla el dia 12 de Octubre del año próximo pasado, para ver y fallar la causa instruida en Cádiz, en averiguacion de los Oficiales é individuos de tropa responsables de la fuga del Coronel D. Pedro Barabá, preso al verificarla en el castillo de Santa Catalina de la expresada plaza, pronunció la sentencia siguiente:—“El Consejo los ha absuelto y absuelve por unanimidad de votos á los antedichos acusados, sin que les sirva de notas en sus hojas de servicios y situaciones, ni perjuicio en su carrera.”—Enterado el Rey (Q. D. G.) á quien he dado cuenta de la citada causa que adjunta remito á V. E. Visto lo que